

## SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



MEXICO

## DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

1A. OFICIALIA MAYOR

Año de iniciación 1936

Hám. 2385

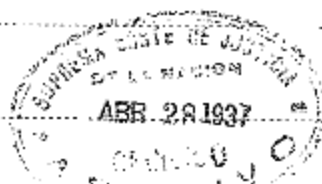
Toca al Amparo docto.

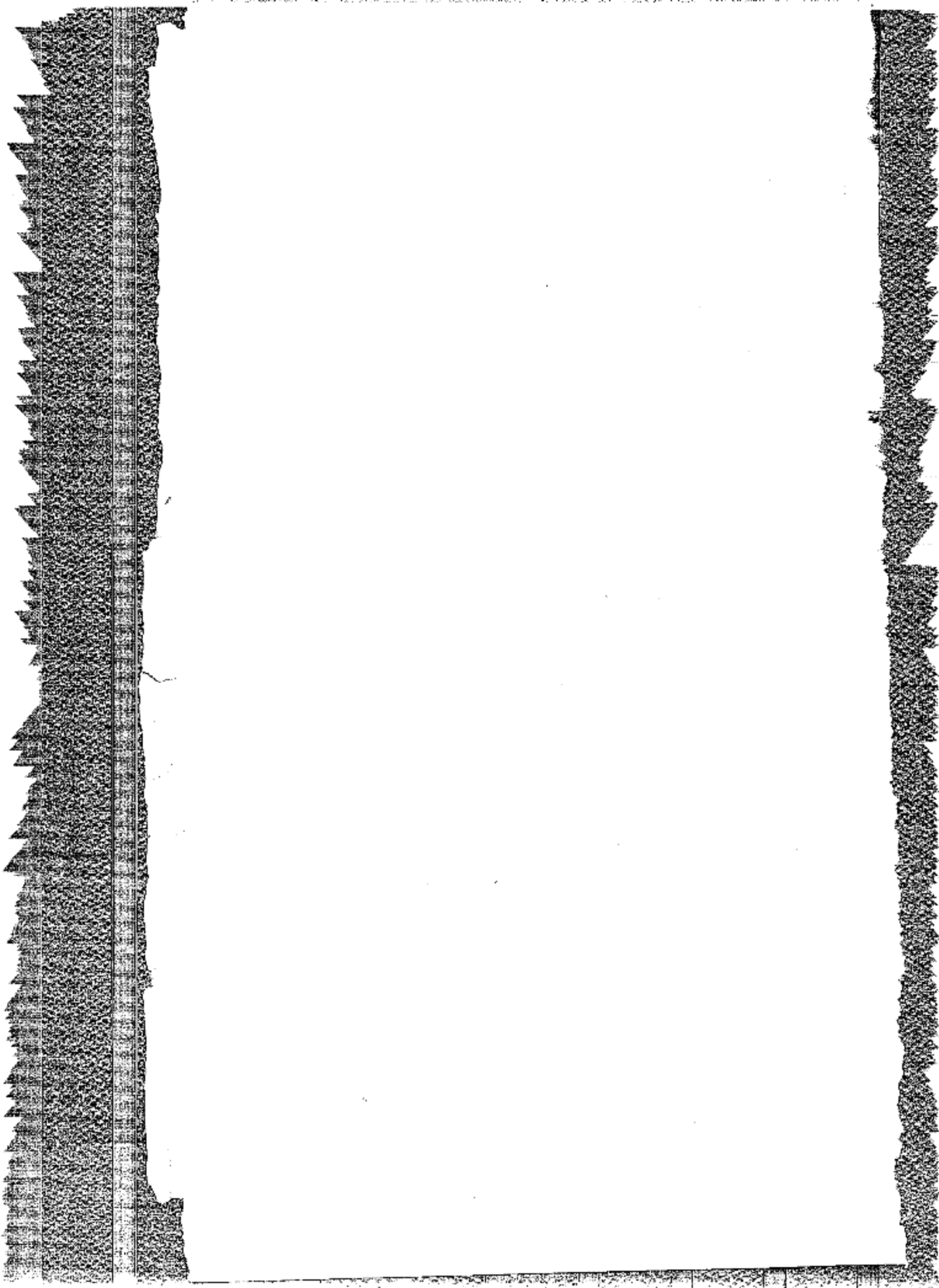
Promovido por Díaz Elena y Hnas.

Contra actos de 5a. Sala del Trib. Sup. de Just. del D.F.

Ante el Juez de Distrito de D.F.

Fecha de ingreso al archivo







México, Distrito Federal.-- Acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del día veintisiete de enero de mil novecientos treinta y siete.

VISTO el juicio de amparo directo promovido por Elena, Clara y Victoria Díaz, contra actos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por violación de los artículos 14 y 16 Constitucionales; y,

RESULTANDO:

PRIMERO:-- El diez y seis de agosto de mil novecientos treinta y cinco, promovió la señora Luz González, viuda de Galán, albacea de la sucesión del señor doctor Emilio Galán, un interdicto de obra nueva en contra de las quejas ante el Juez Décimosegundo de lo Civil de esta Capital, pidiendo la suspensión de la obra que se estaba realizando en la casa número veintiuno de la calle Artículo Ciento Veintitrés y su demolición y restitución de las cosas al estado que tenían, y destrucción de la parte que dijo afectaba la servidumbre de luz de que disfrutaba la casa número diez y nueve de la misma calle, consistente en once ventanas que existen desde tiempo inmemorial en la mencionada casa número diez y nueve de la calle Artículo Ciento Veintitrés. Expuso que la sucesión por ella representada es propietaria de la casa número diez y nueve y en la fecha en que interpuso la demanda se enteró de que se estaban cubriendo las once ventanas de que ha hecho mención, por órdenes de las señoritas propietarias del inmueble marcado con el número veintiuno; que la servidumbre continua y aparente constituida por las ventanas de referencia fue adquirida por la sucesión actora, en virtud

de prescripción, ya que no se tiene memoria de cuando se establecieron esas ventanas; que a pesar de que en la escritura de compraventa por virtud de la que adquirieron las señoritas Díaz el predio contiguo, se determinó que lo adquirirían con todos los gravámenes y servidumbres que de hecho y por derecho le correspondían, violan flagrantemente el artículo 1122 del Código Civil, ya que con las obras que están haciendo resulta serio perjuicio a la casa propiedad de la sucesión, pues de llevarse a cabo la obra, se dejarían los cuatro pisos de que consta sin luz diurna; que el autor de la sucesión fue propietario de la casa número veintiuno, predio sirviente de la servidumbre de luz de que se viene hablando, y la exponente, con las autorizaciones debidas, vendió a las señoritas Díaz dicho predio, por lo que debe considerarse que revivió la servidumbre de luz continua y aparente antes mencionada.

SEGUNDO:- Las señoritas Díaz contestaron la demanda, manifestando que siempre han reconocido a la sucesión del señor doctor Emilio Galán como propietario de la casa número diez y nueve, contigua a la de ellas y que tan es así, que tienen la pared divisoria de ambas fincas en la condición de medianera; que en ejercicio del derecho de propiedad resolvieron construir dentro del perímetro de su casa y sobre la pared medianera de referencia, un muro que taponó las ventanas de los pisos primero y segundo de la casa número diez y nueve perteneciente a la sucesión y lo determinaron después de convencerse de que la albacea de esa sucesión no cumplía su ofrecimiento de tapar dichas ventanas; que si la albacea no tiene memoria de la fecha en que se abrieron las ventanas, en cambio el causante de la sucesión señor doctor Emilio Galán, en la escritura por



la que adquirió la casa número veintiuno, pasada el siete de enero de mil novecientos veinticinco, expresó que las -  
ventanas existentes en la pared divisoria de que se ha he-  
cho mérito y que es medianera hasta la elevación de la nú-  
mero veintiuno, no constituyen servidumbre en favor de la  
número diez y nueve propiedad del señor Galán; que causa -  
pena tener que decir que la representante de la parte acto-  
ra falta a la verdad flagrantemente, pues en la escritura  
formalizada el quince de octubre de mil novecientos trein-  
ta y cuatro por la que adquirieron la casa número veintiu-  
no, no se dijo que la adquirirían con los gravámenes y servi-  
dumbres que de hecho y por derecho le correspondían, sino -  
que por el contrario se asentó que la finca la adquirirían -  
sin reserva ni limitación alguna; que en estas condiciones  
no pueden violar lo dispuesto por el artículo 1122 del Có-  
digo Civil, el que establece que el dueño del predio sir-  
viente no podrá menoscabar en modo alguno la servidumbre -  
constituida por este, puesto que no se puede menoscabar lo  
que ya existe; y que no se causa perjuicio jurídico a la -  
parte actora, desde el momento en que se ejercita un dere-  
cho consagrado en forma expresa por la ley, pues el Código  
Civil en su artículo 850 autoriza al dueño de la finca o -  
propiedad contigua a la pared en que estén abiertas las -  
ventanas o huecos, a construir pared contigua a ella o si  
se adquiere la copropiedad apoyarse en la misma pared, aun  
que de uno u otro modo cubra los huecos o ventanas; que la  
expresión de la actora en el sentido de que debe conside-  
rarse como revivida la servidumbre de luz citada, es inin-  
teligible, ya que para esto se necesitaría que hubiese exis-  
tido antes de la venta, siendo que en la escritura de adqui-  
sición por parte del doctor Galán, este estableció que tal

servidumbre no existía.

TERCERO:- Seguido el juicio por todos sus trámites, se falló en primera instancia el veintisiete de diciembre de mil novecientos treinta y cinco, en cuya resolución el Juez de los autos estima que la obra nueva está amparada por el artículo 850 del Código Civil y por lo tanto no viola derechos de la parte actora, ni la misma actora pudo haber adquirido por prescripción una servidumbre que no existía, no existiendo dicha servidumbre por dos razones; por que había estipulación expresa en contrario, porque las demandadas adquirieron libre de gravamen y porque no pudo adquirirse por prescripción, pues no existía signo aparente de servidumbre en el predio de las demandadas, ya que los huecos y ventanas no constituyen signo aparente. De acuerdo con estas consideraciones, la autoridad de referencia declaró improcedente el interdicto de obra nueva, absolvió a las señoritas Díaz de la demanda interpuesta en contra suya y levantó la suspensión de la obra sin hacer especial condenación en costas. Apeló la representante de la parte actora y se pronunció la resolución correspondiente a la segunda instancia el diez de marzo de mil novecientos treinta y seis, la que revoca la resolución del inferior declarando procedente el interdicto de obra nueva por estar justificada la acción deducida y no así las excepciones; condena a las demandadas a la suspensión y demolición de la obra ejecutada, en la parte que pueda afectar la supuesta servidumbre de luz de que se trata en el interdicto, a cuyo efecto ordena que se otorgue por la actora fianza que sea bastante de acuerdo con el artículo 441 del Enjuiciamiento Civil; y no hace especial condenación en costas.

CUARTO:- Contra esa sentencia iniciaron las señoritas Elena, Clara y Victoria Díaz, el presente juicio de ampa



ro directo que les fue admitido y se tramitó en los términos de ley, habiendo formulado su pedimento el Ministerio Público en el sentido de que se conceda a las quejas la protección de la Justicia Federal que solicitan.

#### CONSIDERANDO:

PRIMERO:- El acto reclamado consiste en la sentencia definitiva que pronunció la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el diez de marzo de mil novecientos treinta y seis, en la apelación relativa al juicio sumario sobre interdicto de obra nueva promovido por la señora Luz González viuda de Galán como albacea de la sucesión del señor doctor Emilio Galán, contra las quejas; y - su existencia se acreditó con la copia certificada del fallo en cuestión, la cual hace prueba plena de acuerdo con los artículos 258, fracción II y 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

SEGUNDO:- La autoridad responsable, sólo declaró procedente el agravio en cuanto al fondo que expresó la parte apelante y que marcó con el inciso "D", agravio en -- que se alega que la afirmación apriorística de que basta -- que no exista servidumbre para que se concluya que carece de acción la parte actora, sustentada en el párrafo tercero de la sentencia de primera instancia, carece de sentido -- legítimo, ya que no debieron tratarse asuntos de otra índole que la ley no sujeta a los juicios de interdicto y que se relacionan con cuestiones de propiedad de inmuebles, dejando para el juicio correspondiente la resolución de esos problemas, y limitándose únicamente a considerar los daños y perjuicios que resiente la casa número diez y nueve de la calle Artículo Ciento Veintitrés con motivo de la obra nueva. Para declarar fundado este agravio expresa la Sala --

responsable que según la ejecutoria de la Corte número tres mil ochocientos treinta y cuatro de mil novecientos treinta y uno, Sección Segunda, de fecha diez y siete de octubre de mil novecientos treinta y tres, pronunciada en el amparo directo promovido por Vicente Fernández contra la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el interdicto de obra nueva procede siempre que se haga una construcción con la que se perjudiquen los derechos de un tercero; y así el que lo intenta, debe probar: primero, que es dueño de la cosa o derecho que se dicen perjudicados; segundo, que existe una obra nueva; y tercero, que se ocasionan los perjuicios reclamados, así como si se trata de una obra concluida que no ha pasado un año después de la terminación de la misma. Que como el Juez Décimo Segundo de lo Civil pasando por alto que los tres elementos señalados quedan debidamente justificados con el juicio sumario en que se dictó la sentencia que se revisa, se ocupó de determinar si existía o no servidumbre y concluyó con los puntos resolutivos que ya se conocen, cometió el agravio de referencia, haciendo una mala interpretación de la referida ejecutoria; que por otra parte, no debe perderse de vista para dar mayor fuerza al argumento expuesto que los interdictos sólo producen efectos de carácter provisional, siendo las consideraciones hechas en el sentido de que la servidumbre no aparecía justificada las que determinaron la absolución a las demandadas, debiendo revocarse la repetida resolución sin condenar al pago de las costas pero exigiéndose para la ejecución de la sentencia, fianza que se otorgará por cantidad que sea suficiente para el aseguramiento correspondiente.

TERCERO:- Las quejas expresan los siguientes





conceptos de violación: 1o., infracción del artículo 850 - del Código Civil, ya que al levantar el muro de que se ha hablado, hicieron uso de un derecho que expresamente les - concede la ley y si hicieron uso de tal derecho al cons- - truir la obra, no puede decirse que se causó perjuicio a - tercero, dado que quien hace uso de su derecho, en sentido jurídico a nadie perjudica; que el hecho de que la ley au- toriza al propietario de una finca para ~~taper~~ las ventanas de la contigua, indica que el perjuicio que este puede re- cibir no es protegible mediante el interdicto de obra nue- va, ya que sería un contrasentido que la ley otorgara un - derecho y a la vez concediera la manera de desvirtuarlos; - tanto más que la Suprema Corte ha sostenido esta misma opi- nión, en ejecutorias pronunciadas el dos de agosto y siete de octubre de mil novecientos treinta y tres, en los ampa- ros directos interpuestos por Piedad Macín viuda de Mendo- za y Clemente Ramos, respectivamente; 2o., que se violan - los artículos 81 y 281 del Código de Procedimientos Civiles, porque la acción deducida se fundó en la servidumbre de luz consistente en las ventanas abiertas en la casa número diez y nueve, habiéndose opuesto dos excepciones, sosteniendo en la primera que el artículo 850 autorizaba a las quejas pa- ra levantar el muro que venía a obstruir las ventanas, y ha- ciendo consistir la segunda, en que no existía la servidum- bre de luz antes citada; que en estas condiciones, el deba- te ha versado sobre la existencia y estorbo de la servidum- bre de luz y la sentencia debió decidir acerca de esa cues- tión en relación con las excepciones alegadas, pero no pe- car de incongruente con la demanda y contestación; 3o., in- fracción de los artículos 1057 del Código Civil y 281 y 333 del Código de Procedimientos Civiles, pues que la servidum-

bre de luz en que se funda la acción deducida no existe, tanto porque la rechaza la estipulación expresa que consta en la parte final de la escritura pública por la que el autor de la sucesión adquirió la casa número veintiuno, como porque sólo existen las servidumbres cuando hay limitación de dominio de un predio a favor de otro, cuando se establece un gravamen sobre un inmueble en favor de otro perteneciente a distinto dueño o se adquiere por prescripción tal gravamen, cosa que no ocurre en el presente caso porque no hay signo aparente de la servidumbre; que esta tesis la ha establecido la Suprema Corte en ejecutoria del diez y siete de octubre de mil novecientos treinta y tres, pronunciada en el amparo interpuesto por Vicente Fernández, sosteniendo la misma Corte en ejecutoria de dos de agosto de mil novecientos treinta y tres, dictada en el amparo directo interpuesto por -- Piedad Macín viuda de Mendoza, que la servidumbre de vista y luces sólo existe cuando el predio dominante recibe luz -- por puertas y ventanas abiertas en el predio sirviente y -- no cuando la recibe por puertas y ventanas abiertas en el predio que pretende ser dominante, sosteniendo finalmente en su ejecutoria de siete de octubre de mil novecientos -- treinta y tres, pronunciada en el amparo interpuesto por Clemente Romanos, "que no existe el perjuicio que la obra nueva pudiese causar al actor, cuando no se demuestre que ésta se está llevando a término dentro de su heredad", elemento que tampoco se demostró en el caso a debate; 4/o. -- que se mutila la ejecutoria dictada en el amparo directo -- promovido por Vicente Fernández, porque la Sala responsable se guía simplemente por la primera parte del sumario, en que se sostiene que para la procedencia del interdicto debe probar el actor: primero, que es dueño de la cosa --



raíz o de los derechos que se dicen perjudicados; segundo, que existe una obra nueva; y tercero, que ésta ocasiona los perjuicios reclamados; que si la mayoría de la Sala se hubiera hecho cargo de la ejecutoria en su integridad, habría encontrado que precisamente ella rechaza el interdicto que la motiva, porque no existía la servidumbre de luz, en cuya violación se hacen consistir los perjuicios ocasionados por la obra nueva reclamada; pero aun en la forma trunca en que se presenta la citada ejecutoria, es insostenible el criterio de la quinta Sala, porque la actora no probó ser dueña de un derecho de servidumbre de luz en que se hizo consistir precisamente el derecho que se dice perjudicado con la obra nueva, y consiguientemente tampoco se satisfizo el tercer requisito, dado que el perjuicio, en términos jurídicos, importa la violación de un derecho, derecho que no existe a favor de la actora; - 5/o., infracción de los artículos 10., fracciones I y II, 19 y 255, Fracción VI del Código de Procedimientos Civiles ya que no es exacto que el Juez de los autos haya pasado por alto que los elementos señalados quedaron debidamente justificados en el juicio sumario, siendo la Sala sentenciadora la que incurre en la omisión que atribuye a su inferior, pues no indica la forma como quedaron acreditados los tres elementos mencionados en el punto anterior y sus razonamientos son difíciles de interpretar por su falta de precisión y claridad, tanto más que no se invoca texto alguno legal que los respalde, desprendiéndose de la exposición hecha por el C. Magistrado que desintió de la mayoría, que se estimó como prueba del derecho reclamado la simple prueba de la propiedad sobre la casa contigua a la de las quejas, cosa antijurídica a todas luces; que la

Sala declara procedente el agravio en que la recurrente - manifiesta que la sentencia de primera instancia no debió tratar cuestiones de propiedad inmueble, dejando para el juicio correspondiente la resolución de esos problemas, y declara procedente este agravio porque considera demostrado que la sucesión del doctor Galán es dueña de la casa - número diez y nueve, es decir, porque estima que debe tratar cuestiones de propiedad en el interdicto entablado, - cosa que implica una contradicción; tanto más que el agravio debió desecharse porque en él no se invocan los fundamentos de derecho y los preceptos legales o principios jurídicos aplicables; que la autoridad responsable expresa que no debe perderse de vista que los interdictos sólo producen efectos de carácter provisional, pero que esa provisionalidad que invoca la Sala no robustece sus argumentos, mucho menos cuando esa provisionalidad es definitiva, aniquiladora, puesto que la sentencia manda derrumbar la obra; y 6o., infracción de los artículos 81 y 441 del Código de Procedimientos Civiles, pues la sentencia - en un interdicto de obra nueva sólo puede ordenar la demolición de ésta, cuando la obra implica una usurpación de la posesión del demandado, de manera que al ordenar la sentencia la demolición de la obra establece que esta invade las posesiones de la parte actora, es decir, que el muro que se empezó a construir no descansa dentro del perímetro de la posesión o propiedad pertenecientes a las quejas, cosa que la demandante no ha sostenido, habiendo quedado acreditado que el muro en cuestión se levanta sobre la propiedad de la casa número veintiuno; que la sentencia reclamada, no obstante que da a entender que no debe analizarse lo relativo a la existencia de la servidumbre de luz, la viene a proteger sin antes haber establecido



do su existencia, según lo requiere el artículo 10., fracción I del Código de Procedimientos Civiles; y teniendo como supuesta la servidumbre de luz, al mismo tiempo la da por existente, mandando derrumbar la obra nueva sin adoptar medidas de seguridad para la finca de las quejas, no obstante que la propia actora sugirió que se adoptaran y los peritos las propusieron.

CUARTO:— En los conceptos de violación que se extractan en el considerando anterior bajo los números segundo, quinto y sexto, alegan substancialmente las quejas que la sentencia de segunda instancia es incongruente con la demanda y contestación, porque el debate versó sobre la existencia y estorbo de la servidumbre de luz y nada resuelve sobre esa cuestión el fallo de segundo grado; que no es exacto que el Juez de los autos haya pasado por alto que los elementos constitutivos de la acción ejercitada quedaron debidamente justificados, siendo la Sala sentenciadora, la que incurre en la omisión que atribuye al inferior, puesto que no indica la forma como quedaron acreditados tales elementos; y finalmente, que la autoridad responsable no aplica debidamente el artículo 441 del Código de Procedimientos Civiles al ordenar la demolición de la obra, no obstante que ésta en el caso a debate no implica una usurpación de la posesión del demandado. Estos conceptos de violación son procedentes, de acuerdo con las siguientes consideraciones. El interdicto es una acción posesoria que se tramita en juicio sumario y que tiene por objeto resolver una cuestión de hecho, hasta en tanto que se resuelve la de derecho. Esto es, en el juicio de interdicto, la posesión de un derecho real es el título legal que sirve de fundamento a la acción y para que proceda, es absolutamente indispensable que esa posesión de un derecho real —

quede comprobada por el actor, y que así mismo se acredite que tal posesión se desconoce y ataca por el demandado. Esto no significa que cuando el interdicto se funda en la posesión de una servidumbre, tenga que resolverse en este juicio sobre la existencia o inexistencia de aquella servidumbre; pues la demanda en un interdicto no tiende a obtener una declaración sobre la existencia de la servidumbre, sino simplemente se propone para alcanzar la protección de la posesión, evitando que alguien se haga justicia por su propia mano; quien entabla un interdicto fundándose en un derecho de servidumbre, no pide en realidad que se declare que existe tal servidumbre o que tiene título bastante que ampare ese derecho real, sino que se limita a solicitar la declaración sobre la posesión de un derecho protegible por medio del interdicto, derecho que se le ataca de propia autoridad por el demandado. Ahora bien, en el caso a debate, la demanda se fundó en que con la obra nueva se menoscaba la servidumbre de luz, constituida por once ventanas que existen en la casa número diez y nueve sobre la número veintiuno, ambas de la calle Artículo Ciento Veintitrés de esta Capital, servidumbre que se dice fué adquirida por prescripción, habiéndose determinado en la escritura de compraventa por la que adquirieron las quejosas el predio sirviente, que lo adquirirían con todos los gravámenes y servidumbres que de hecho y por derecho le correspondían. En estas condiciones, se necesitaba acreditar por la parte actora, en primer lugar, que está en posesión de la servidumbre de luz en que funda su interdicto; pero este elemento de la acción no aparece acreditado en autos, sino más bien desvirtuado con la escritura de siete de enero de mil novecientos veinticinco, por virtud de la cual adquirió el doctor Emilio Galán, autor de la sucesión ac-



tora, la casa número veintiuno que posteriormente fué vendida a las señoritas demandadas en el interdicto y quejas en este amparo, pues de dicha escritura aparece que el doctor Galán ya era propietario en la fecha en que adquirió la casa número veintiuno, de la casa contigua marcada con el número diez y nueve, habiendo manifestado que las ventanas existentes en la pared divisoria de esas dos casas y que es medianera hasta la elevación de la número veintiuno, "no constituyen servidumbre en favor de la número diez y nueve, propiedad del señor Galán". Esto no significa que la Sala responsable haya debido declarar inexistente la servidumbre de luz que se dice menoscabada con la obra nueva, sino simplemente que en el caso a debate, la parte actora no acreditó estar en posesión de la servidumbre de luz mencionada; y no acreditado este elemento esencial de la acción, la autoridad responsable infringió la ley al declarar procedente el interdicto, y consiguientemente al ordenar la demolición de la obra nueva.

Por lo expuesto y fundado, más lo que ordenan los artículos 103, fracción I. y 107, fracciones II y VIII de la Constitución y 76 a 79, 184, 186 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO:- La Justicia de la Unión ampara y protege a las señoritas Elena, Clara y Victoria Díaz, contra actos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistentes en la sentencia definitiva que pronunció dicha autoridad el diez de marzo de mil novecientos treinta y seis, en la apelación relativa al juicio sumario sobre interdicto de obra nueva promovido por la señora Luz González viuda de Galán como albacea de la sucesión del señor Doctor Emilio Galán, contra las quejas.

SEGUNDO:- Notifíquese; remítase testimonio de es-

Cotejado con el  
proyecto aprobado  
por el C. Ministro  
Francisco H. Ruiz.

*Galdo*

ta ejecutoria a la autoridad designada como responsable,  
y en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema -  
Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco -  
votos de los señores Ministros Alfonso Pérez Gasga, Sa-  
bino M. Olea, Abenamar Eboli Paniagua, Luis Bazdresch -  
y Presidente de la Sala Francisco H. Ruiz. Firman los -  
Ciudadanos Presidente y Ministros que integraron la Sa-  
la, con el Secretario que autoriza.- Doy fe.-

PRESIDENTE:

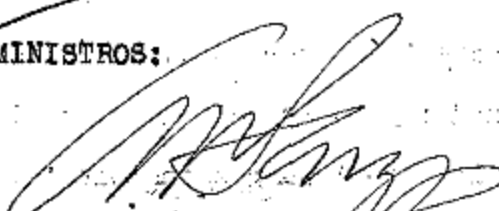
  
Francisco H. Ruiz.

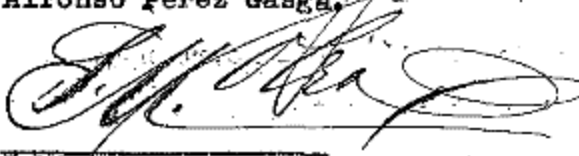


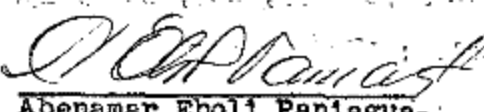
Vo. Bo.

*Rm*

MINISTROS:

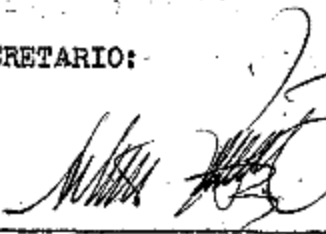
  
Alfonso Pérez Gasga.

  
Sabino M. Olea.

  
Abenamar Eboli Paniagua.

  
Luis Bazdresch.

SECRETARIO:

  
Arturo Puente y F.